

1996-2017

Las heridas de Riosucio

Cátedra de paz

Felipe Chica Jiménez
Paco Gómez Nadal
Ana Luisa Ramírez Flórez



**Programa
Editorial**

Universidad
Autónoma
de Occidente

1996-2017

Las heridas de Riosucio



Programa
Editorial

Universidad
Autónoma
de Occidente

1996-2017

Las heridas de Riosucio

Felipe Chica Jiménez
Paco Gómez Nadal
Ana Luisa Ramírez Flórez



**Programa
Editorial**

**Universidad
Autónoma
de Occidente**

Santiago de Cali, 2017

Chica Jiménez, Felipe

1996-2017 Las heridas de Riosucio / Felipe Chica Jiménez, Paco Gómez Nadal, Ana Luisa Ramírez Flórez, Paul Smith.-- Primera edición.-- Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2017. 70 páginas, fotografías.

ISBN: 978-958-8994-35-2

1. Desplazamiento forzado - Riosucio, Chocó (Colombia). 2. Conflicto armado - Riosucio, Chocó (Colombia). 3. Víctimas del conflicto armado. 4. Verdad, justicia y reparación. I. Gómez Nadal, Paco. II. Ramírez Flórez, Luisa. III. Smith, Paul. III. Universidad Autónoma de Occidente.

303.66 - dc23



Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

1996-2017 Las heridas de Riosucio

ISBN 978-958-8994-35-2

Primera Edición, 2017

Autores:

Felipe Chica Jiménez | Paco Gómez Nadal | Ana Luisa Ramírez Flórez

Fotografías

Paul Smith

Mapa

Fidel Mingorance

Edición

Pilar Chato Carral

Diseño y diagramación

Emanuel Gimeno

Gestión editorial

Director (E) de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico

Alexander García Dávalos

Decano Facultad de Humanidades

Jesús Alfonso Flórez López

Jefe Programa Editorial

José Julián Serrano

jjserrano@uao.edu.co

Coordinación Editorial

Claudia Lorena González González

clgonzalez@uao.edu.co

Comunicadora

Luisa Fernanda Panteves Ospina

lfpanteves@uao.edu.co

Asistente Editorial

Jorge Acero Portilla

jhacero@uao.edu.co

Impresión

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S.

Universidad Autónoma de Occidente

Km. 2 vía Cali-Jamundí, A.A. 2790, Cali, Valle del Cauca, Colombia

El contenido de esta publicación no compromete el pensamiento de la Institución, es responsabilidad absoluta de su autor.

Personería Jurídica de la Universidad Autónoma de Occidente, resolución 0618 del 20 de febrero de 1970, otorgada por la Gobernación del Valle del Cauca. Universidad Autónoma de Occidente, resolución No. 2766 del 13 de noviembre de 2003. Vigilada MinEducación.

Índice

Resistir, otra vez resistir	11
Retornar... así cueste más muerte	15
Los silencios de Riosucio	25
Riosucio quema en la memoria	31
Una impunidad que confirma complicidades	37
¿Y si Colombia recordara Pavarandó?	47
“Llorar para tener resistencia, comer cuando había pasado el hambre, perder vidas y amores”	53
Las mentiras oficiales	59
Así nace una guerra	65

Resistir, otra vez resistir

La colonización europea entró a Colombia por las bocas del Atrato, pero la resistencia de los pueblos indígenas hizo que los poblados creados por los españoles fueran quemados en varias ocasiones, lo cual condujo al traslado de la sede de la primera diócesis en tierra firme de Santa María la Antigua del Darién a lo que hoy es Panamá.

Luego vino la piratería de ingleses y franceses que obligó a los españoles a cerrar la navegación por el río Atrato durante un siglo.

La abolición legal de la esclavitud en 1851 condujo a que muchos descendientes de africanos se trasladaran a estas selvas para reconstruir sus vidas, junto a aquellos otros congéneres que se habían emancipado creando palenques. Estos moradores negros generaron una convivencia con los pueblos nativos, tules y embera, luego con los wounaan y los mestizos que arribaron mayoritariamente finalizando los años 60 del siglo XX, como sobrevivientes del período de violencia de los años cincuenta.

También el río Baudó, al sur de Chocó, vio salir a muchos de sus moradores para el bajo Atrato ya hace varias décadas, quienes contribuyeron al poblamiento de esta cuenca.

El inicio de los años 90 trajo esperanza, pues finalmente, a partir de la Constitución de 1991, se pudo establecer la Ley 70 de 1993 que reconocía la identidad de las Comunidades Negras como grupo étnico partiendo del reconocimiento de la propiedad colectiva de sus tierras. Con este avance, negros e indios avanzaron en fortalecer sus organizaciones, de una parte la OCABA (Organización Campesina al Bajo Atrato) y por otra parte CAMIZBA (Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato), para establecer el ordenamiento territorial y con ello definir sus Planes de Vida y Planes de Etnodesarrollo.

Pero este proceso se truncó, como ocurrió con la instauración de la colonia europea, cuando llegaron los nuevos colonizadores, quienes necesitaban estas tierras para profundizar la agroindustria, ya no solo del banano sino ahora de la palma aceitera, la minería y la gran hacienda.

Esta invasión a los territorios de indios y negros del bajo Atrato se hizo con el pretexto de erradicar a la guerrilla, para lo cual se construyó una estrategia de “combinación de todas las formas de lucha” entre la Fuerza Pública, paramilitares, inversionistas privados y otros estamentos del Estado como notariado, sectores judiciales y expresiones del ejecutivo, inaugurada a finales de 1996 y confirmada con la denominada como Operación Génesis, a partir del 24 de febrero de 1997.

Hoy, 20 años después, emerge el deber de la memoria. Las víctimas hablan para recordar aquel drama de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, destrucción y debilitamiento de sus organizaciones y miles de personas desplazadas que huyeron despavoridas hacia Turbo, Quibdó, Medellín y otras latitudes.

Este texto pretende rendir un homenaje a los muertos y a las víctimas sobrevivientes, además de evocar el daño para permitir que esas mismas personas puedan reclamar una vez más que se conozca toda la verdad, se aplique justicia y se haga reparación.

El actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP abre de nuevo sentimientos y pensamientos de esperanza, pero justo cuando se inician los dos Puntos Transitorios de Normalización, en el medio y bajo Atrato, se posicionan de nuevo grupos paramilitares. Esta situación genera mucha incertidumbre, pero convoca a una exigencia de toda la sociedad colombiana al Estado para que ejerza su obligación de controlar y desmontar este actor de violencia y así garantizar la protección de estas comunidades que, a 20 años de la Operación Génesis, quieren reconstruir sus proyectos de vida personal y colectivos.

Área de impacto de las operaciones RIOSUCIO y GÉNESIS



Fuentes: Colombia Plural, 2016, Archivo propio 2000-2016
OSM, IGAC, DANE, Natural Earth 2012-2016



Fidel Mingorance
HREV, 2017 · V.02





Felipe Chica Jiménez

Retornar... así cueste más muerte

Fotografía: Felipe Chica

En las estribaciones del Bajo Atrato colombiano se sucede la reconstrucción de comunidades desplazadas por la guerra que entró en sus vidas en diciembre de 1996.

“Resulta, y pasa, que a Belén de Bajirá se la quieren robar los paisas”, dice un joven chofer de un jeep, que viaja a 80 kilómetros por hora sobre la recta que conduce de Chigorodó (Antioquia) a Riosucio (Chocó). Afuera, ver la sencillez de un minifundio habitado por campesinos es una rareza. La regla son los monocultivos y los potreros de ganado.

Desde hace medio siglo la selva comenzó a rendirse ante la expansión histórica del departamento de Antioquia. Belén de Bajirá sigue en disputa. Los antioqueños la consideran corregimiento de Mutatá y los chocoanos, uno de sus municipios. En una de sus paredes se lee un graffiti que reza: “2 de octubre paro armado AGC -Autodefensas Gaitanistas de Colombia-”.

Por toda esta vasta planicie del Bajo Atrato, desde 1996, los paramilitares han asesinado y desplazado a miles de personas (94.341 hasta el 1 de noviembre de 2016, según el Registro Único de Víctimas).

Tierra usurpada

“Por acá la demora es que usted reclame lo suyo para que lo maten”, advierte un aserrador en Riosucio que prefiere el anonimato.

Del título colectivo de 46.084 hectáreas correspondientes al Consejo Comunitario del Río Curvaradó, 25.000 fueron usurpadas por empresarios agroindustriales y paramilitares como ya demostró la justicia. El lío se ha ido resolviendo en el papel pero en el terreno la gente espera la devolución de sus predios porque, pese a que la Corte Constitucional ha ordenado regresarlos a sus legítimos dueños, los empresarios se han negado alegando ‘buena fe’ en su compra.

Con esa ‘buena fe’, Vicente Castaño, alias El profe y jefe económico de los paramilitares en esos años de 1996 y 1997, “invitó a empresarios palmicultores

para que invirtieran en la región del Curvaradó, y Jiguamiandó. Fue así como arribaron a tierras chocoanas empresas como Urapalma S.A, Palmadó Ltda, Agropalma & Cia Ltda, Palmas de Bajirá, entre otras, las cuales terminaron ocupando los territorios abandonados [por el desplazamiento forzado]”, como demostró el equipo de investigación de Verdadabierta.com

Caída la tarde, una avanzada de nubes pareciera declarar el fin del mundo. El exjefe paramilitar alias Nube Negra es uno de los criminales señalados como acaparador de tierras en el Curvaradó donde la partida entre los hijos de la tierra y los herederos de la mafia se va perdiendo después de 20 años de asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamiento de los civiles.

Voces del retorno

En Riosucio la alegría hay que salir a buscarla al otro lado del Atrato, donde están las familias que dejaron el exilio del desplazamiento para retornar a sus tierras ancestrales. Para ver semejante arremetida de coraje en una zona acosada por narcotraficantes y actores armados es necesario entrar a la selva por la boca del río Salaquí.

Tres horas de navegación por una vasta red de desvíos fluviales donde lo más fácil es perderse y terminar en el Océano Pacífico o desorientado a espaldas del Tapón del Darién. Con suerte, se avanza sin contratiempos. Pero son comunes los choques entre lanchas y los cúmulos de madera podrida que frenan el paso, las palizadas. En las orillas se cuentan montones de casas abandonadas desde finales de los noventa, cuando los paramilitares entraron por agua y el Ejército por aire en un acto sincronizado, que recibió el nombre de Operación Génesis y la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En total, son 12 las comunidades que están retornando a la cuenca del río Salaquí.

La primera en encontrarse es El Guineo, no más de diez casas. La lancha se acerca y sobre la margen del río se asoman los pies ásperos de Apolinar Gómez, con su bermuda roja y una escopeta sobre el hombro derecho.

Cuando Apolinar recibió el tiro en la espalda tenía cincuenta y dos años. Le dispararon desde un helicóptero. Su familia dejó la ciénaga y lo llevó a Riosucio donde un médico de Cartagena le salvó la vida. Entre el sangrado y el afán de huir, Apolinar recuerda a su mujer empacando una piel de tigrillo que él mismo había cazado.

-¿Por qué recuerda eso?

- Porque con esa piel mi mujer hizo una correa y con esa correa le pagamos al doctor la operación, contesta el hombre que no concibe mejor comida que la carne de monte.

La casa tiene los maderos podridos y se nota la arremetida del abandono.

-¿Por qué decidieron volver?

-Póngase usted a pensar que allá en el pueblo todo es plata, en cambio acá está todo, dice mientras hace un movimiento con la mano señalando un paisaje sin tiendas, ni carreteras, ni edificios, sino lleno de ciénagas, ríos, montes y ellos mismos, que parecen no necesitar nada más.

Al cabo de unos minutos Apolinar se confiesa. Según el viejo de caminado chueco, cuando joven se la pasaba en Coco-Arenal, otra comunidad aguas arriba, donde se formaban los corrinches de baile. Deja su escopeta, se monta en la lancha y guía el camino hasta ese lugar.

Allá, Julia Rodríguez termina de colgar ramilletes de arroz seco. Su negro, gordo como ella, le quita las escamas de tres peces. Ambos andan por encima de los cincuenta. Un grupo de monos aúlla. Al menor de los hijos lo desaparecieron los paramilitares. Para ella, volver es verlo corriendo entre platanales riendo sin contención. Ese recuerdo le da sentido de patria al lugar.

“Esta comunidad era la más alegre del Salaquí, acá se le ponía música al personal. Los aserradores venían y se tomaban su cerveza y seguían pa’ Riosucio”, explica la mujer que viene regresando de forma intermitente desde el 2001.

“Acá, en Arenal, hemos regresado nueve familias, pero de forma... graneada... éramos como noventa personas antes de que llegaran los paramilitares”.

Américo López, de 40 años, vive en Coco-Arenal y recuerda que una tarde de 1995 las FARC le ofrecieron entrar a sus filas. Él no aceptó. Tampoco lo obligaron a hacerlo. Los milicianos pidieron gallina, plátano y se fueron por un camino que conduce hacia Río Ciego.

A ese sitio se llega después de atravesar un bosque de higuerillas inundado donde son comunes las serpientes y tortugas sobre las enormes raíces. El agua cristalina refleja la vegetación hasta que la figura de un niño sostenido las correas de un caballo aparece a espaldas de un camino de trocha. Le gusta que le digan ‘Gula’.

Con 11 años y su cuerpo fino, Gula asegura los equipajes al caballo y conduce el camino entre el pantano y un hilo de agua que baja desde la loma. En el Bajo Atrato todas las comunidades se reconocen por ríos: la gente de Cacarica, las mujeres de Domingodó y los niños del Salaquí...

Antes de nacer, Gula ya era dueño de la tierra porque su familia es una de las 500 a las que el Estado colombiano les entregó el título colectivo de 60.083 hectáreas que comprende toda esa hoya hidrográfica.

Luego de caminar dos horas entre el pantano se asoman entre los árboles tres banderas: la de Colombia, la de la paz y la de Chocó. A un lado de ellas está Edgardo Gómez. El 23 de febrero de 1996 a él no lo despertó el habitual grito de guacharaca sino el silbido de tres Súper Tucano de ataque ligero. La primera explosión retumbó al otro lado de la montaña, hacia el Cacarica, la segunda en Domingodó. Con miedo a que la tercera estuviera reservada para él y su comunidad, coordinó la huida en minutos. En el desplazamiento un grupo de paramilitares los interceptó; a él lo arrastraron a culatazos. Cuando le quitaron la venda de los ojos tenía enfrente a Carlos Castaño, el máximo jefe ‘político’ de las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Quería saber dónde estaban los campamentos de las FARC, yo no dije nada porque no sabía nada... Es que acá todos hemos sido campesinos, la

guerrilla ha pasado por estos corredores, claro, una vez acamparon y luego siguieron, entonces, desde que uno no les diga nada, con uno no se meten”, explica Edgardo sin entender todavía, 20 años después, cómo esa vez los paramilitares no lo mataron.

A él, las canas le contrastan con su piel oscura. Vino al Bajo Atrato a finales de los ochenta, en los tiempos de la bonanza marimbera. Después de la Operación Génesis, Edgardo fue el primero en volver a Río Ciego. Esa vez trajo consigo las banderas y las clavó a un costado de la cancha de fútbol. “Hemos retornado 60 familias [de las 120 iniciales] y esperamos otras tres el año siguiente”.

En el Urabá chocoano hay una mezcla de paisas, afros, costeños, indígenas y chilapos, que es como le dicen a la gente de Córdoba. La conversación con Edgardo se sucede bajo una higuerilla. Sobre el árbol, a siete metros de altura, dos Embera mueven el teléfono celular para captar señal.

Elecciones comunitarias

El padre claretiano Francisco Rodríguez también ha sido clave en el proceso del Salaquí. Tiene 29 años, y los últimos seis se los ha dedicado a trabajar con las comunidades del Bajo Atrato. El 8 de diciembre llegó junto a Colombia Plural a Río Ciego para desempeñarse como garante en la elección de representante legal de Consejo Comunitario. La razón de hacer una elección en los confines de estos bosques es simple: apoyar con presencia organizativa a las familias que tomaron la decisión de regresar.

Apolinar vino en representación del Guineo, Julia y su esposo de Cocola Arenal. En total, son 11 las comunidades de todo el río las que se presentaron. No son muchos, pero saben a qué fueron y a qué se enfrentan.

Del criterio del elegido dependerá la administración de proyectos de inversión sobre el territorio, los permisos de explotación maderera y la función que preocupa a todos: mediar los pleitos por la tierra derivados del retorno en pleno proceso de implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.

Una vez se instala la Asamblea, Francisco se levanta de su silla e interviene: “No olvidemos que estamos ante una desmovilización de las FARC. Nos compete a nosotros asumir ese desafío desde ya, porque muchos terminarán en las comunidades y estamos en la obligación de velar porque esa reinserción no sea conflictiva, tenemos que ayudar en ese proceso”. La gente aplaude.

Francisco explica que últimamente llegan a las comunidades guerrilleros vestidos de civil para tantear el terreno y tratar de generar relaciones con la gente. En el pueblo se dice que la presencia del Frente 57 de las FARC en los ríos de este margen del Atrato evitó la usurpación masiva de tierras como en otras zonas. La apreciación está lejos de ser un guiño para los guerrilleros, pues muchos de los testimonios los señalan como victimarios y algunas comunidades aún esperan que pidan perdón por algunos líderes asesinados.

El padre termina su discurso y sale a tomar aire. A su lado está Olga Ramos. Lo que más recuerda ella del desplazamiento es haber visto a una mujer dando a luz en medio de una carretera y una nube de zancudos. Olga aún no tiene la certeza de regresar, sus hijos se encuentran estudiando en Riosucio, y la escuela de Río Ciego, reconstruida en los últimos años, no tiene bachillerato.

Bajo un platanal se martillan las paredes de madera de una nueva casa. Será la de Luis Gonzaga. También tomó la decisión de volver.

Antes de la elección no hay orden del día. La gente levanta la mano y opina. Una joven de 24 años se levanta y rinde un informe sobre las ayudas disponibles para las familias. Es la secretaria de la Asociación de Comunidades del Bajo Atrato (ASCOBA). En 2010 un grupo de mujeres de Riosucio ganó el Premio Nacional de Paz. Con parte del dinero se propusieron apoyar con semilla y herramientas a las familias que tomaran la decisión de volver a su monte.

La cosa funcionó y se ha ido creciendo más por gestión comunitaria que por ayudas del Estado. Al lado de la cocina colectiva hay una trilladora de arroz. “Solo Dios sabe cómo la trajeron”, dice Francisco; en su base, un tendido de vainillas de cereal se extiende por varios metros. En cosecha se pueden bajar hasta cuarenta costales llenos de arroz a vender al pueblo junto con el plátano y la madera.

-¿Han renunciado al retorno algunos por temor?

- Claro, pero nosotros decidimos regresar así nos costara más muerte
-contesta Edgardo.

Según él, desde 2003 el narcotráfico se disparó en la región.

- Lo más importante -concluye- es fortalecer la economía de la comunidad para no caer en la tentación de sembrar coca y seguir alimentando esos grupos.

Termina la Asamblea en un Bajo Atrato turbio e incierto. El asesinato de líderes no para. En medio de todo, acá hay razones para vaciar un par de botellas de ron. Al final del día la arenga colectiva es un tatata-tututu difícil de entender para un ciudadano pero común en las entrañas de estas tierras. Es la gente del Salaquí a quien la guerra le quitó todo... menos el coraje.

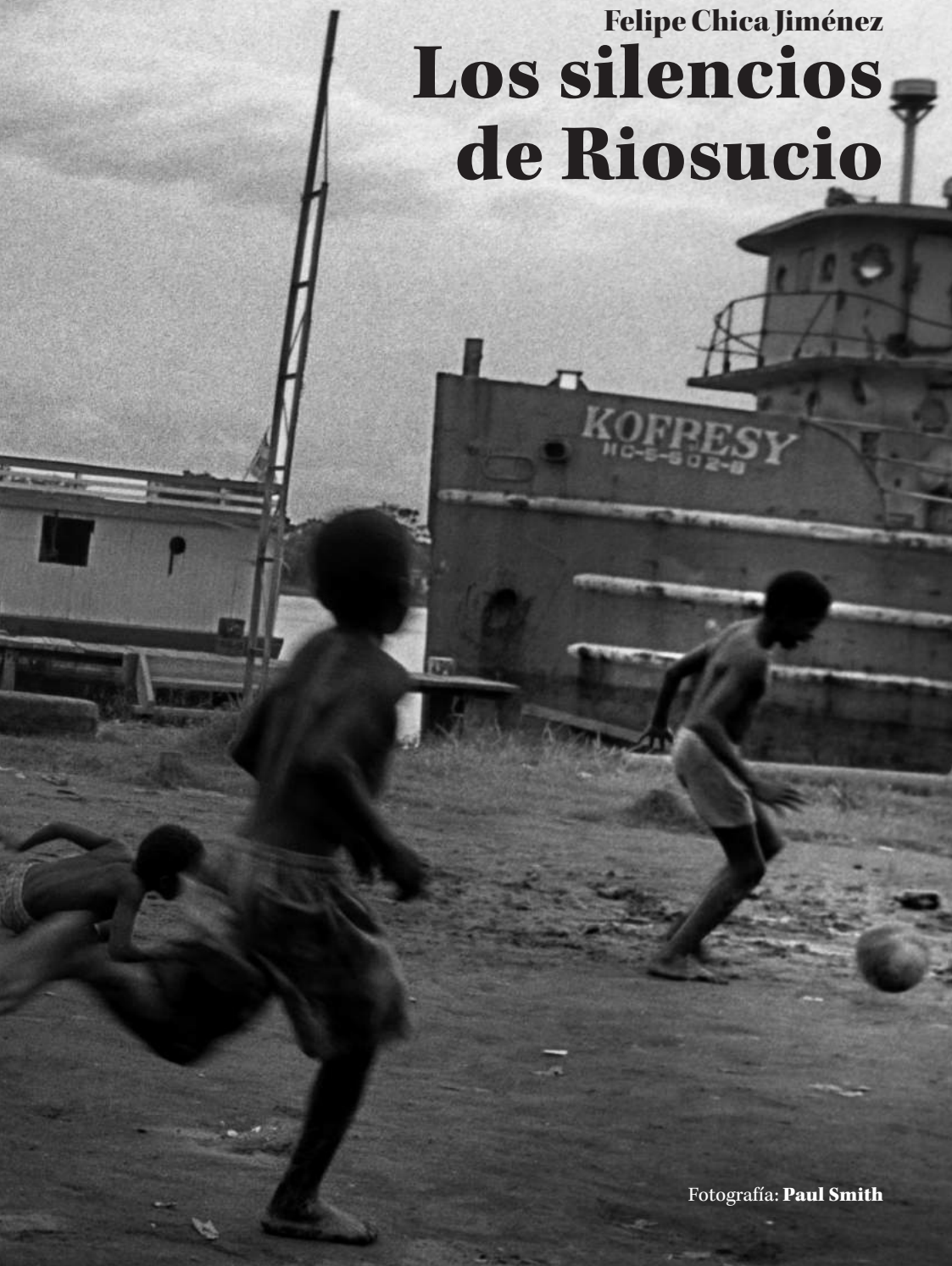


RIOSUCEÑO
CON TU APOYO CONTI-
NUAMOS DERROTANDO
LOS NARCOTERRORIS-
TAS FARC-ELN ENEMIGOS
DE LA PATRIA Y EL
PROGRESO DE COLOMBIA

BCG.  35.



Felipe Chica Jiménez
**Los silencios
de Riosucio**



Fotografía: Paul Smith

Veinte años después de la arremetida paramilitar, la disminuida población del casco urbano vive bajo el toque de queda paramilitar, la permanente ausencia del Estado, las palabras que no se dicen y la incertidumbre.

En Riosucio todo sucede a orillas del río Atrato: las labores domésticas, el enamoramiento y los negocios. Sobre todo los negocios. Una lancha colmada de madera llega. El dueño de un barco tan grande como un doble troque se acerca y le pone precio a la carga. Dos manos se estrechan. Tres negros desfilan lentamente con los tablones hacia el interior de la nave. Cada pieza cuesta lo que tres cervezas nacionales. Cuando zarpen hacia Turbo valdrán el doble. Una vez en Cartagena, el triple.

Esta es una región rica en recursos, una región colosal. Sobre todo colosal. Tanto que muchos de los desplazados que han llegado a Riosucio piensan que sus comunidades quedan en lugares lejanos, que las anteceden variados paisajes y extrañas costumbres, como si el Chocó fuera un país que limita al occidente con el Océano Pacífico, al sur con Ecuador, al norte con Panamá y al oriente con Colombia. El pueblo queda a mitad de camino entre Quibdó y el Golfo de Urabá, en el Atlántico; lo rodean vías fluviales que llegan incluso al Pacífico.

Aquí todo es silencioso, hasta el río cuando se desborda bajo las casas, ocupando todo, confiriendo a la gente un estilo de vida anfibio. Los niños chapotean en aguas de color tierra. Los hombres se sientan a la sombra para soportar el calor, las mujeres van y vienen a todas partes en un hormigueo incesante. Todo fluye hasta que se pronuncia la guerra, una palabra que al ser verbalizada atrae atención y rechazo como un cristal roto. Riosucio pareciera ser la síntesis de un país en transición, no se habla de lo importante pero se maldice la incertidumbre: la de no saber si lo que trae el Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos será vuelos de palomas o esquirlas de granada.

La gente desengañada habla poco. El principio de realidad de esta comunidad no se disuelve en recuerdos dolorosos. Más arriba del río que baña Riosucio está Bojayá, en ese lugar en el 2002 cientos de personas “protegidas” en la iglesia invocaban a Dios mientras una pipeta de gas de las FARC les caía

del cielo. Algunos de las víctimas viven ahora en este pueblo. El dolor y la memoria están interconectados en este río de resistencias.

Grupos de mujeres con sombrillas de colores compran comida y entran a la iglesia, son la alegoría de una sociedad patriarcal. Ahí adentro se resuelven la mayoría de problemas domésticos y comunitarios. Sin cita previa, sin derechos de petición, basta persuadir al párroco claretiano y listo.

Durante siglos la iglesia católica ha puesto más esmero en penetrar estos territorios que el mismo Estado, de modo que la guerra la obligó a tomar partida. Se fueron con la gente. Si algo debe decirse de los misioneros en estos lares es que no solo hacen proselitismo religioso, también le ponen pecho a los actores armados. Durante el desplazamiento masivo de principios de 1997, los claretianos coordinaron la llegada de las familias en Pavarandó.

Por esa época, el Frente 57 de las FARC era el rector de buena parte de la vida de los veintiocho mil habitantes de entonces, hasta que los paramilitares, con la ayuda probada del Ejército Nacional, replegaron a los guerrilleros hacia zonas selváticas de Chocó. En esas décadas de ocupación fariana del Bajo Atrato se habían creado sinergias que rápidamente los paramilitares asociaron con las Juventudes Comunistas de Urabá y con otras organizaciones sindicales surgidas del apogeo bananero. El que no alcanzó a huir, tuviera o no alguna relación con los insurgentes, fue exterminado.

El paramilitarismo llegó para hacer nido. En 20 años de control, de zozobra y de pobreza, la población disminuyó a casi 16.000 mil habitantes. Los violentos se ensañaron con el poblado más importante del Bajo Atrato. Al cabo del narcotráfico, los pactos oscuros y de un proceso de paz con el Gobierno de Álvaro Uribe llamado 'Justicia y Paz' hay más millonarios que gente presa; los reductos armados de esa 'desmovilización' se multiplicaron. El fracaso de ese contrato lo pagan pueblos como este.

Para mimetizar tamaña sensación de impunidad, el Estado convino en renombrar el fenómeno del paramilitarismo: bandas criminales (Bacrim), Clan Úsuga o Clan de Golfo. Un apellido clave, una geografía estratégica. Los negocios requieren cierto grado de descaro. Mucho más los derivados de la

guerra. Después de tanto, los detentores materiales de esa enorme transacción de muerte por tierra acudieron al recurso que más le ha permitido la sociedad colombiana: el cinismo semántico e ideológico. Se inventaron en simultáneo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

La coca, la palma africana y el ganado

La comunidad explica que el tráfico de cocaína se multiplicó con esa intervención conjunta entre el Estado y los paramilitares. Las tierras de los desplazados pasaron a ser suntuosos cultivos de palma africana y extensas planicies de ganado.

Pero un sector de las FARC se niega a salir de la escena. En Cacarica lo sufren. Allá se han registrado dos enfrentamientos entre las FARC y las AGC en el último año (2016), según testimonios locales. Eso sí, la coerción de la guerrilla hacia las comunidades se convierte en un recuerdo. Algunos lo celebran, otros no. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el nivel de riesgo de esta comunidad por la presencia de bandas criminales. El actual alcalde Municipal, Luis Enrique Mena, del Partido de la U, no respondió a las llamadas ni estaba en su despacho a la hora de concretar este reportaje.

En las montañas, los cultivos de coca y laboratorios para el procesamiento de clorhidrato son conocidos. ‘Los jefes’ pagan por el transporte de droga desde Riosucio hasta Panamá, por el Tapón del Darién; reclutan jóvenes en las comunidades alejadas para trabajar en el negocio. Las AGC vacunan a cambio de protección a los primeros como al resto de comerciantes legales. ¿De quién los protegen en una región bajo su control?

Para los líderes y lideresas del Bajo Atrato, lo pactado en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC no va a evitar que las disidencias guerrilleras se disputen una ruta del narcotráfico que guarda similitudes geoestratégicas con la del Bajo Mira, en Nariño, o el Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

En la tarde, un grupo de militares compran cigarrillos, mientras el pueblo entero holgazanea después del almuerzo. En 2016, esa institución incautó 13.834 kilogramos de clorhidrato según la Oficina de Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito. Una cantidad simbólica si se confía en los testimonios locales, que afirman ver lanchas con motores de 250 caballos de fuerza atravesando el río hacia el Golfo de Urabá. En el imaginario social esas potentes máquinas solo pueden ser para el tráfico de drogas.

Las autodefensas han posicionan su poder con miedo y panfletos amenazantes. De octubre a diciembre de 2016 fueron asesinadas tres personas en el municipio, uno de ellos tenía 13 años. “Así se hacen sentir” con la población. Al foráneo ‘blanco’ le asignan un hombre malencarado que le pasa revista de pies a cabeza y hace preguntas suspicaces. En las calles, el silencio no decretado permite incluso que los paramilitares vestidos de civil puedan cruzar el saludo con algunas personas ataviadas con chalecos de la cooperación internacional.

Después de las diez de la noche, nadie sale, hay toque de queda de las AGC. Las preguntas sobre el conflicto armado se contestan a esa hora; en la calle oscura y tibia donde el silencio grita.



A black and white photograph of a window with a metal grille. The grille consists of vertical bars and horizontal crossbars. A decorative handle, possibly a bird or a stylized figure, is attached to the grille. The window is slightly ajar, and the view outside is blurred, showing some foliage and a building. The overall mood is somber and reflective.

Paco Gómez Nadal

Riosucio quema en la memoria

Fotografía: PGN

El claretiano Emilio Gómez no olvida. Ni las fechas, ni los hechos, ni el profundo dolor. Este sacerdote de 78 años fue un símbolo de resistencia ante la embestida paramilitar y ahora, 20 años después, no puede ser optimista.

Emilio Gómez Jaramillo aprendía geografía de niño imaginando un avión que lo llevaba de su Rionegro natal a Bogotá, a Cali, a La Guajira... “Parecía que ya sabía yo que allí habría aeropuerto”. Tuvieron que pasar muchos años antes de que eso sucediera. El padre Emilio nació el 9 de marzo de 1938 y el aeropuerto no sería inaugurado hasta 1985. En la geografía imaginaria de aquel niño que llegó al mundo con la ayuda de su abuelo, el partero Ramón Jaramillo, tampoco figuraba Riosucio (Chocó), el lugar donde le tocaría vivir los momentos más esperanzadores, primero, y más amargos, después, de toda su vida.

Emilio camina ahora con cierta dificultad. Sube los peldaños de la casa de formación claretiana en Medellín con energía pero con pasos cortos. A los 78 años su memoria está intacta aunque recordar le duela hasta desbordar sus ojos y hasta provocar que en tres horas su voz se atragante en dos ocasiones con una humedad de muerte.

Para el sacerdote que estaba al frente de la parroquia de Riosucio en el diciembre fatídico en el que todo cambió, en 1996, no hay nada casual. “Claro que la entrada paramilitar tenía que ver con los títulos colectivos y con tantos proyectos que esa gente tiene para el Bajo Atrato”. Fueron años de trabajo duro para los claretianos. Primero, impulsado por otro claretiano, Agustín Monroy, después, desde 1994, con Emilio Gómez y un puñado de ingenieros forestales y abogados que ayudaron a las comunidades a traducir la Ley 70 de 1993 en una realidad. El 13 de diciembre de 1996 se conoció la primera resolución que adjudicaba Títulos Colectivos de Comunidades Negras en el municipio de Riosucio: en Chicao, Clavellino, La Nueva, Bocas de Taparal, Dos Bocas y La Madre.

“Los paramilitares se iban acercando a Riosucio por la vía carreterable a Bajirá y el 6 de octubre de 1996 llegaron al caserío de La Madre. Era domingo, sacaron a las familias de las casas y, en la única calle del pueblo, los hicieron tirarse al

empedrado, primero boca abajo, después boca arriba, varias horas. Sacaron a una persona y delante de todos le dispararon tres tiros. Luego sacaron a otro y lo llevaron detrás del caserío y luego de varios tiros lo tiraron al río. Antes de irse, les dieron varias consignas y les avisaron que llegarían a Riosucio pronto”.

Emilio conoce bien lo que pasó en La Madre porque caminó 70 kilómetros, acompañado de miembros de la Acción Comunal, para ver qué había ocurrido y tranquilizar a la comunidad. Eran tiempos complejos. Riosucio era un municipio sin Estado, controlado por las FARC. De hecho, “en el casco urbano había cientos de milicianos”, pero “no había problema, eran el Estado y no había choques, estábamos acostumbrados”. Los paramilitares y la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa (Urabá antioqueño), no opinaban lo mismo. Y su plan, en manos del que luego sería el poderoso Bloque ‘Élmer Cárdenas’, ya había comenzado meses antes en Unguía, en febrero de ese mismo año. La operación prevista para Riosucio supondría el principio de una sangrienta guerra territorial que subió por todo el río Atrato dejando una huella indeleble.

“El 20 de diciembre de 1996, a las seis menos cuarto, pasaron el frente del puerto de Riosucio cuatro pangas con treinta o cuarenta paramilitares cada una [el Tribunal Superior de Medellín estableció que en el operativo participaron 132 hombres armados), muy veloces. A las seis empezaron a sentirse disparos tanto de parte de la policía como de los paramilitares. Todos los habitantes nos quedamos con las puertas cerradas y llenos de miedo. Los tiros eran al aire, así que me di cuenta de que era una pantomima para atemorizar al pueblo. Se llevaron amarrados al alcalde encargado, a un profesor y a dos muchachos hasta el caño Santa María la Nueva del Darién. Allí mataron al profesor y al alcalde encargado y luego soltaron a los dos estudiantes”.

Lo ocurrido el 20 de diciembre llevaba planeándose desde hacía meses y la sucesión de hechos se lo fue demostrando a Emilio -como las versiones libres

de los comandantes paramilitares se lo confirmaron a la justicia después. El mismo 21 de diciembre, a las 11 y media de la mañana, “llegaron los primeros helicópteros con soldados y con el general Rito Alejo del Río [condenado en 2012 a 25 años por el asesinato de un campesino en Bijao, dentro de la operación Génesis]. En las pocas palabras que cruzamos con él en compañía de la hermana Teresa, de la Comunidad de la Presentación, nos alcanzó a decir que los paramilitares eran necesarios”.

Para Emilio Gómez, y para la población de Riosucio, empezó el tormento. Ante el temor, confirmado después, de que la Armada bloqueara el río Atrato, hubo una primera estampida de casi 4.000 personas del casco urbano. Antes, los milicianos de las FARC habían puesto distancia. Los soldados estuvieron en las calles de Riosucio hasta el 28 de diciembre y ese 31 de diciembre fueron los paramilitares los que obligaron a los bailaderos a poner música para despedir el año. “Solo se oían los disparos que ellos hacían para recibir 1997”.

El 9 de enero las FARC intentaron recuperar la cabecera municipal, pero fracasaron en el intento dejando cadáveres y miedo regados por igual. Las Fuerzas Militares reaparecieron en febrero para bombardear las comunidades del río Salaquí, el Truandó o el Cacarica y la guerrilla dio la orden a los campesinos de desplazarse para llegar a la carretera Medellín-Turbo. El Ejército los devolvió y así fue como Pavarandó se convirtió en el gran punto de concentración de desplazados. Un campesino le resumía así a Emilio la relación de estas comunidades con el Estado: “Esta guerra es la única visita del Gobierno que hemos recibido en siglos, llegó por el aire y trajo bombas y las dejó caer sobre nuestras casas y entonces entendimos que en Bogotá alguien se había acordado de nosotros”.

A partir de ahí, “lo único fue recoger cadáveres, recoger cadáveres, recoger cadáveres”, incluidos los de 15 catequistas que colaboraban con la parroquia. “Yo tenía un listado de 200 y pico asesinados, pero lo perdí cuando se me quemó un disco duro...”. Y ver partir gente. Si en los pocos días de 1996 tras la entrada paramilitar se desplazaron 3.961 personas, según el Registro Único de Víctimas, en 1997 fueron 50.350. Una diáspora en la que tuvo que participar Emilio Gómez cuando en junio de 1997 tuvo que salir de la zona amenazado por los paramilitares.

Para el padre Emilio, aún recordado en la zona, hay algunas constataciones evidentes que ha denunciado desde aquellos tiempos: “Los paramilitares y el Ejército eran la misma cosa”, detrás de toda la operación y de la guerra misma “están los intereses económicos”, el futuro de Riosucio “es cruel, porque detrás están los megaproyectos y la apropiación de tierras para minería y ganadería”, y el reto es ver si “las comunidades aguantan y si se pueden librar del arribismo de algunos líderes”.

Quizá por lo vivido, a este hombre ejemplar que ahora pasa desapercibido en las calles de un Medellín cegado por las luces de Navidad le cuesta ser optimista. “Aunque en las comunidades se han dado positivos, la verdad es que nosotros, los colombianos, somos muy violentos. Nos cuesta perdonar porque en el subconsciente profundo está esa idea de que hasta que no desmenuzamos al enemigo no hay reconciliación”.

Sin embargo, al igual que los recuerdos arden en los ojos de Emilio Gómez, también son siembra en los territorios por los que ha pasado. Luis Carlos Agudelo, un colaborador muy cercano de Emilio en la tarea de la titulación, recuerda cómo una vez se marchó solo en caballo a Nueva Luz, en los límites con Antioquia. “Allí los paramilitares habían hecho presencia, la gente del caserío estaba encerrada y lista en mano sacaban de las casas a los supuestos colaboradores de la guerrilla. Ya había personas muertas no sepultadas y el terror vivía en ese lugar. En esos momentos llegó el padre Emilio, saludando a los hombres armados, la gran mayoría lo conocían y seguro todos habían oído de él. Abrió la capilla, llamó a misa insistentemente, pasó por cada casa, reunió a la gente, celebró la eucaristía e invitó a enterrar a los muertos. La gente atemorizada no lo acompañó en primera instancia. Él mismo procedió con la tarea cristiana de darles sepultura y de alguna forma, se le unieron otras personas; me dijo un líder campesino, que hasta paramilitares. Otro lo describió así: ‘Fue muy guapo ese cura, nos sacó de la tumba, se metió en ese peligro por nosotros, y eso que casi todos somos evangélicos’, terminó con una sonrisa”.



Paco Gómez Nadal

Una impunidad que confirma complicidades



Fotografía: Paul Smith

Nada ha pasado. Se sabe casi todo sobre cómo se diseñó y ejecutó la operación Riosucio y la Operación Génesis, pero ni ha habido justicia ni ha existido reparación.

La guerra a veces tiene una fecha de inicio. En el Chocó se la pueden poner. Antes del 20 de diciembre de 1996 el Chocó estaba abandonado por el Estado. Era un departamento suelto en la lógica de un país que dejaba zonas enteras al albur de un destino incierto. Pero el 20 de diciembre de ese año, uno de los actores armados, en alianza estrecha con una de las ramas del Estado, la militar, comenzó una operación -“Retoma de Río Sucio”- que marcaría para siempre la vida de los chocoanos. Por si había alguna duda de la estrategia y sus actores, dos meses después, en febrero de 1997, quedó todo claro con la Operación Génesis, acción conjunta entre la Fuerza Aérea, la Brigada XVII del Ejército y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. A final de ese año, en diciembre, se cerró el círculo territorial de la acción conjunta en el río Jiguamiandó.

Por Riosucio entró al Chocó la guerra que ya desangraba antes al Urabá antioqueño y que se regó como una mancha de terror por todo el río Atrato hasta llegar al San Juan y muchos de los ríos y caños que vuelcan su caudal en ellos. Se conocen los actores, los responsables y las víctimas, pero estas últimas son las únicas que cargan con la historia.

No hubo nada casual. Las primeras señales de lo que se venía las vivieron Unguía y Acandí, en el extremo norte del Chocó, ya cerquita de Panamá, donde el entonces grupo paramilitar ‘La 70’ (luego bautizado Bloque Élder Cárdenas) hizo dos incursiones de muerte en febrero de 1996.

El aviso se repetiría unos meses después, cuando el 6 de octubre hicieron lo mismo en el caserío de La Madre y, después de matar delante de los vecinos a dos civiles, anunciaron que el siguiente paso sería Riosucio.

No hubo nada casual. La Madre era una de las seis comunidades beneficiadas con la primera concesión de títulos colectivos para comunidades negras en el país que concretaba la Ley 70 de 1993. Eran 8.250 hectáreas para La Madre que se sumaban a las de Chicaco, Clavellino, La Nueva, Bocas de

Tuparal y Dos Bocas para sumar las 60.816 hectáreas inalienables que ponían en peligro el proyecto de palma aceitera que Vicente Castaño, El Profe, había ideado para la zona.

La resolución de 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Operación Génesis concluyó que el proyecto de Vicente Castaño y de los empresarios palmeros necesitaba de un modelo de seguridad con “la protección armada perimetral y concéntrica de la Brigada XVII del Ejército y de civiles armados en sus factorías y bancos de semillas. Los operativos e incursiones armados en estos territorios han tenido el objetivo de intimidar a los miembros de las comunidades, ya sea para que se vinculen a la producción de palma o para que desocupen el territorio”.

La confirmación de que la operación iba en serio se dio en Riosucio. El 10 de diciembre de 1996 se reunieron en Santa María varios jefes paramilitares para diseñar la acción. No hubo nada casual. En tres de las versiones libres de Fredy Rendón, El Alemán, máximo comandante paramilitar en la operación de Riosucio y luego jefe del Élmer Cárdenas confirma que unos días antes Carlos Castaño les pidió a él y a Raúl Hasbún Mendoza, Pedro Bonito, que volaran a Medellín y que en el aeropuerto Olaya Herrera les esperaría un contacto que les diría con quién coordinar la operación. “El contacto que manejaba algunas situaciones para la Casa Castaño en Medellín les dijo: ‘Este es el nombre del coronel, y díganle que van de parte mía’. Se montaron en una avioneta y una hora y 20 minutos después aterrizaron en el departamento del Chocó, en su capital Quibdó; tomaron un taxi y se dispusieron a llegar al comando de Policía, literalmente les dijeron que el Coronel les estaba esperando. Se ha aportado por parte de El Alemán, no solamente el nombre de ese Coronel, sino de cada persona de la fuerza pública que participó en la operación Riosucio (...)” [Auto de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. 3 de septiembre de 2013].

El “coronel” al que alude El Alemán era el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Puerto, comandante de la Policía del Chocó y algunos de los nombres que facilitó el jefe del Bloque Élmer Cárdenas y que luego confirmaron otros comandantes paramilitares fueron los del teniente Luis Alfredo Burgos Pabón, que era jefe de la CIPOL (el extinto Cuerpo de Inteligencia

Policial) en el departamento, y los subtenientes Esteban Guzmán Vargas, Henry Alonso Cortés Aparte y Edgar Henry Correa Núñez, responsables del puesto de Policía en Riosucio.

No hay decisión alguna sobre estos mandos a pesar de que la Fiscalía 48 compulsó copias a la justicia ordinaria para que se investigara a esos cinco oficiales. Un simple rastreo de estos personajes concluye que todos han seguido sus carreras policiales sin mayores inconvenientes. Rigoberto Ojeda publica ensayos con la Universidad La Gran Colombia; Luis Alfredo Burgos ha prosperado y ha llegado a ser comandante de Policía en diferentes distritos de Nariño; Henry Alonso Cortés fue detenido en 2009 cuando, siendo el jefe de investigaciones criminales de la Policía en Cesar, se quedó junto a otros dos oficiales con parte de una recompensa destinada a un delator paramilitar; Esteban Guzmán Vargas era en mayo de 2016 comandante operativo de la Policía del Magdalena.

El Alemán confirmó cómo y con quién se planificó la operación: “(...) después de reunirnos con ese coronel, y de darnos el sí, que la Policía estaría dispuesta a no disparar contra nuestras motonaves en el momento de la entrada y que además mandaría un capitán de la policía secreta o de su inteligencia para que asumiera el puesto de Policía para que eso no se saliera de las manos y que nosotros pudiéramos desarrollar la Operación y que además ese Coronel sabía además que iban a haber unas retenciones en la cabecera municipal y que se les iba a dar muerte y que así pasó. Fue entonces cuando nos dispusimos de la misma manera a coordinar con el Ejército Nacional y con la Brigada XVII [con sede en Carepa y comandada entonces por el general (r) Rito Alejo del Río], con los diferentes mandos y jefes de inteligencia y coroneles... (...) y fue así como nos sentamos con el coronel Paulino Coronado Gámez, alias Don Diego, quien era el de inteligencia de la Brigada XVII y con él nos reunimos Carlos Correa y Elmer Cárdenas”.

Paulino Coronado nunca fue procesado por la operación de Riosucio y hubo que esperar hasta que saltó el escándalo de los “falsos positivos” para que en 2008 el entonces ya brigadier Paulino Coronado Gámez fuera retirado del Ejército, junto a otros 18 oficiales y 6 suboficiales, cuando comandaba la XXX Brigada con sede en Cúcuta, en cuya jurisdicción se hallaron los cuerpos

de 11 de los jóvenes desaparecidos en Soacha. A día de hoy, aún no hay sentencia en su contra. Coronado Gámez había sido antes alumno aventajado de la tétrica Escuela de las Américas, responsables de operaciones psicológicas del Ejército e, incluso, creador de la Agencia de noticias del Ejército. La brigada de Carepa fue un buen lugar de prácticas para él, bajo el mando de Rito Alejo del Río, condenado a 25 años por el asesinato de Marino López en el marco de la Operación Génesis, en febrero de 1997.

La Brigada XVII, que participó en la operación Riosucio y diseñó la Génesis, tal y como ha quedado establecido por la justicia nacional e internacional, estaba dirigida por el general Rito Alejo del Río, que solo está condenado por un asesinato dentro de la Operación Génesis, quien apoyó el accionar paramilitar, así como varios de sus oficiales. Quizá el más conocido es el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien era el responsable del B2 (inteligencia militar) de la Brigada y que, después de 11 años prófugo de la justicia, fue atrapado en 2014. Plazas Acevedo, conocido como Don Diego por los paramilitares, fue parte esencial de la Génesis y cumple 40 años de condena por el secuestro y asesinato de un empresario israelí y es relacionado con el asesinato de Jaime Garzón y con la masacre de Mapiripán.

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín concluye que “estos actos atroces, que no fueron aislados, obedecieron a una política del grupo orientada a sentar una hegemonía estratégica, económica y social en la zona del Urabá chocoano, lo que configura una clara línea o patrón de conducta”.

¿Dónde están los comandantes ‘paras’?

El grupo paramilitar que operó en 1996 era aún las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), una combinación de lo que se conocía como Casa Castaño -coordinada por los hermanos Vicente y Carlos- y otros grupos mercenarios de la región. La Operación Riosucio es una acción conjunta de la Casa Castaño y del grupo creado por Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, un potente ganadero de Necoclí (Urabá antioqueño), que comenzó con un grupo conocido como Los Güelengues (paramilitares

urbanos), luego creó La 70 (rural) y ambos, ya unidos, terminaría siendo el temido Bloque Élder Cárdenas. Alias Carlos Correa murió en 2005 durante una discusión con otro paramilitar (Jalker Sierra Miranda, alias Gamba) en Necoclí.

Dos eran sus comandantes de confianza para la entrada a Riosucio, un bastión guerrillero en ese año 1996. Por un lado Élder Cárdenas, alias Cabezón, quien con apenas 21 años era uno de los comandantes más admirados por sus compañeros por su carácter guerrillero. Cárdenas murió el 18 de diciembre de 1997 durante la Operación Recmacho, en el río Jiguamiandó. El bloque que operaba en el Chocó tomó su nombre.

El otro comandante importante en el operativo -y que terminaría siendo el señor de la guerra en el Chocó y máximo responsable del Bloque Élder Cárdenas- era Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, que se había incorporado un año antes a los paramilitares de Carlos Correa. Hermano de Daniel Rendón, alias Don Mario, se acogió al proceso de Justicia y Paz impulsado por el Gobierno de Uribe y salió de la prisión de Itagüí el 28 de julio de 2015, después de cumplir poco más de ocho años de encarcelamiento y de haber rendido varias versiones libres. Se considera que ha sido de los mandos paramilitares, junto a Ever Veloza (alias HH), que más información ha aportado. La Fiscalía ha podido atribuir 5.400 hechos directivos al Bloque Élder Cárdenas que él comandaba y recientemente se imputó a El Alemán y a otros 23 miembros del Bloque por 3.327 de esos hechos. En un confuso incidente, a finales de marzo de 2016, El Alemán terminó hospitalizado en estado de coma por un supuesto accidente en bicicleta ocurrido en Medellín. Nada se sabe desde entonces del que fue conocido como “el Führer de Urabá”.

En la operación de Riosucio fue clave un exguerrillero y responsable de milicias en ese municipio. Se trata de Julio César Arce, alias Alacrán o ZC, que además de servir de guía fue el que identificó y marcó a las primeras personas en ser desaparecidas o asesinadas. Después, él seleccionó a otros 11 hombres que, según los testimonios de El Alemán, se presentaron en la XVII Brigada de Carepa y se pusieron a las órdenes del coronel Plazas Acevedo, quien se encargó de su transporte por aire hasta el río Salaquí, donde hicieron de guías en la Operación Génesis. Se acogió a la Ley de Justicia y Paz.

William Manuel Soto Salcedo, alias Don Rafa, fue el comandante de La 70 y su experiencia como ex militar fue de mucha “utilidad” en la incursión en Riosucio. Se acogió al proceso de Justicia y Paz y cumplía condena en Itagüí. Otros de los exmilitares reclutados por el grupo y que participó en la incursión fue Pablo José Montalvo Cuitiva, alias Alfa 11, quien fue el encargado de concentrar a los mercenarios en Santa María para preparar la incursión. También está en Justicia y Paz.

Estos y otros hombres del Bloque Élder Cárdenas se han quejado en repetidas ocasiones de que sus versiones libres no han servido para nada a la hora de perseguir a funcionarios públicos, militares, comerciantes y empresarios implicados en sus operaciones. De hecho, en 2010, El Alemán, aseguraba: “Venimos desde hace tiempo señalando a terceros, hemos juramentado esas versiones, señalando a quienes han tenido responsabilidad, porque no yo pude haber actuado solo, pero eso no avanza”.

Los *paraempresarios* en la alianza

No hubo casualidades en la alianza que permitió la toma de territorios y municipios en el Bajo. A las dos patas armadas, Fuerzas Militares y paramilitares, hay que sumar la empresarial, que no parece haberse beneficiado de forma accidental, sino que aparece en la planificación y desarrollo de estas estrategias. El patrón de conducta del que hablan los jueces era para disputar el control territorial a la guerrilla de las FARC-EP, que hasta ese 1996 eran el Estado paralelo en el municipio de Riosucio, pero que también consolidó un gran negocio para los paramilitares y sus aliados. Por una parte, con el control de inmenso negocio maderero que, tradicionalmente, había sido la principal actividad económica del municipio (Maderas del Darién aparece en innumerables versiones libres y la Fiscalía ha recomendado que se investigue su participación en la expansión del Bloque Élder Cárdenas de las AUC). Después, con la expansión territorial y la implantación del proyecto de palma africana, que avanzó en las cuencas del Cacarica, del Jiguamiandó y del Curbaradó con la inestimable colaboración y financiación de organizaciones como la cooperación estadounidense para el desarrollo (UASID) o de entidades del Estado a través del programa “Alianzas productivas para la paz”.

El proyecto de palma de aceite, diseñado por Vicente Castaño, “había contado con el apoyo de los Ministerios de Desarrollo y Agricultura, del Banco Agrario, del Fondo de Fomento para el Sector Agropecuario Finagro, de la Gobernación de Antioquia y del Fondo de Inversiones para la Paz. La etapa inicial obtuvo un préstamo del Banco Agrario dentro del Programa de Oferta Agropecuaria (...) No obstante, el proyecto enfrentó el obstáculo nuevo que había derivado del proceso de titulación colectiva iniciado en 1996: los cultivos se encontraban dentro de Territorios Colectivos de Comunidades Negras, tierras inembargables, imprescriptibles e inalienables y solo podían ser dedicadas a usos forestales, en cabeza de dichas comunidades”, según explica la politóloga Paola García Reyes, de la Universidad del Norte, en su libro ‘Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano’. El problema de los territorios colectivos fue solucionado a punta de bala y motosierra.

De hecho, en 2004, funcionarios del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) visitaron las cuencas del Jiguamiandó y del Curvaradó y concluyeron que el 93% del área sembrada de palma se encontraba dentro de los territorios colectivos adjudicados a las comunidades negras de esos Consejos Comunitarios. Además, detectaron que, en contra de la Ley 70, las empresas habían realizado 203 contratos de compraventa de mejoras por 14.801 hectáreas.

Paola García Reyes recuerda que: “El 18 de mayo de 2010, la Fiscalía General de Colombia dictó orden de captura contra los 23 empresarios vinculados por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasión en áreas de especial importancia ecológica. Según la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, las empresas [palmicultoras] ‘fueron verdaderas fachadas que escondían el pacto o la alianza celebrados entre autodefensas y empresarios, que no era otro que delinquir repetida y permanentemente en el Bajo Atrato chocoano’. Como resultado de las investigaciones, para julio de 2013 once personas habían sido condenadas o acusadas en proceso, 40 más estaban siendo investigadas, con el fin de establecer la responsabilidad de las empresas y de algunos funcionarios públicos”.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en uno de sus informes sobre el despojo de tierras, concluye que Vicente Castaño, alias El Profe,

“cooptó la institucionalidad encargada de apoyar, autorizar y financiar este tipo de iniciativas [productivas]: Gobernación de Antioquia, Corpurabá, Codechocó, Finagro y Banco Agrario, e Incora, oficinas de notarías, catastro y registro (...)”. Para el CNMH, el efecto directo de la operación Riosucio y de la Operación Génesis fue una “parainstitucionalidad militar” en el Bajo Atrato que, además, fue financiada con fondos para la paz, como el dinero que llegó a la corporación ASOCOMÚN (Asociación Comunitaria de Córdoba y Urabá), de Fredy Rendón, El Alemán (y manejada por su hermano Jairo, alias Carrancho), alimentada por instituciones públicas o por la mismísima USAID. La guerra paramilitar es indisoluble de la parapolítica y de la paraeconomía. No hubo nada casual. Veinte años después, con 13.000 peticiones de la Fiscalía de Justicia y Paz para que se investigue a empresarios y funcionarios, con relatos pormenorizados de cómo se orquestó el plan y cómo se realizó... no ha habido justicia.

La entrada paramilitar en el Bajo Atrato, antesala de la brutal guerra que ha convertido al Chocó en un departamento de víctimas (el 80% de su población aparece en el Registro Único de Víctimas), fue preparada de forma minuciosa en coordinación entre los paramilitares, el Ejército y la Policía Nacional. Nunca se produjo una disculpa del Estado. Hoy, al llegar al aeropuerto que da servicio a Urabá, en Carepa, sigue dando la bienvenida un inmenso cartel de la Brigada XVII y en la región todavía muchos recuerdan a Rito Alejo del Río -el oficial detrás de Génesis- con el sobrenombre que le puso el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe: “El pacificador de Urabá”.



A black and white photograph of a child in a shanty town. The child is in the foreground, looking towards the camera with a serious expression. The background shows a cluttered, makeshift settlement with various structures and debris.

Paco Gómez Nadal

¿Y si Colombia recordará Pavarandó?

Fotografía: Paul Smith

Los miles de desplazados de Riosucio en 1996 y 1997 fueron parte de uno de los mayores éxodos conocidos en el país. Veinte años después, su historia aún está por contar.

“Llegamos por el río Curvaradó a Jiguamiandó, sin nada: mujeres pariendo, niños sin comida... la idea era coger para Medellín, pero uno de los líderes propuso ir a Pavarandó. En ese momento ya éramos como 600 personas. Pasamos por Cuatro Tapas, Llano Rico, La Secreta... era un camino bastante duro. Llegamos a La Secreta de noche, ahí ya éramos como 3.000 personas. Arrancamos yuca cruda, comimos... [en ese momento se le rasga la voz]. Amanecimos ahí, nos encontramos con la Cruz Roja. Una mujer dio a luz en la trocha, el susto le hizo venir al niño. Fueron varios días. Lo que me han dicho es que mis ancestros llegaron de colonos... huyendo de Cartagena. Algo así nos pasó a nosotros”.

Ana Luisa tiene memoria (ver capítulo siguiente). Vivió el éxodo de Riosucio y sus pies aún están impregnados del recuerdo a lodo y hacinaamiento. Ana Luisa salió de Riosucio como otros miles... Las cifras bailan pero Amnistía Internacional asegura que no fueron menos de 20.000 personas las que abandonaron veredas y cabecera municipal entre diciembre de 1996 y el primer trimestre de 1997. Unos salieron en familia, con lo puesto, camino de Panamá, de Turbo, de Quibdó, de Bahía Solano, de Cartagena, de Medellín. Otros lo hicieron en comunidad. Unos salieron tras la ejecución de algún vecino o por la escenificación del terror por parte de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; otros, huyendo de los bombardeos de la Fuerza Aérea durante la ignominiosa Operación Génesis; el resto, empujados por las FARC, que forzaba un éxodo con la intención de que los campesinos llegaran a Mutatá (Antioquia) y llamaran la atención de la opinión pública sobre lo que ocurría en el invisible Bajo Atrato. Solo la Operación Génesis, recuerda Amnistía Internacional, supuso la expulsión de “6.500 personas de 49 comunidades del municipio de Riosucio que vivían en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó, Quiparadó, Chintadó, Domingó, Curvaradó y Jiguamiandó”.

Ana Luisa sabe que su memoria es fuerte y digna y también sabe que la gestión de esa memoria y de la resistencia le toca a las comunidades. Nadie

más está allá para recordar, rodeados, aún, de los actores armados que truncaron vidas y anhelos. Cuando después del sufrimiento del camino llegó a Pavarandó, el que fue considerado el mayor campo de refugiados de Colombia, se tuvo que adaptar al sufrimiento del confinamiento. La Brigada XVII del Ejército no pensaba dejar pasar a los desplazados hasta la carretera que conecta con Medellín, y el general Rito Alejo del Río decidió con las autoridades municipales que sería en el corregimiento de Pavarandó donde los concentrarían. Unas 4.500 personas malvivieron en un coliseo del que ya no hay memoria.

La Defensoría del Pueblo, en su resolución 25 de 2002, explicaba que “las familias desplazadas en Pavarandó se vieron obligadas a permanecer, durante nueve meses, en críticas condiciones de hacinamiento, pobreza extrema y bajo permanentes amenazas contra sus derechos, provenientes de los diferentes grupos armados. Estas condiciones llevaron a las comunidades a tomar la decisión de organizarse y conformarse en comunidades de paz con el objetivo de retornar a sus tierras, en condiciones de dignidad y seguridad. Este retorno se hizo efectivo entre finales de los años 1997 y 1999 (...). La primera en constituirse, el 19 de octubre de 1997, fue la Comunidad de Paz de San Francisco de Asís. Posteriormente, se constituyeron las Comunidades de Paz de Nuestra Señora del Carmen y Natividad de María. Actualmente [2002], las Comunidades de Paz de Riosucio están integradas por 49 comunidades con una población de aproximadamente 5.000 personas, ubicadas en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó, Domingodó, Jiguamiandó, Curvaradó y Atrato, en los municipios del Carmen del Darién y Riosucio”.

Los retornos fueron permanentemente interrumpidos o revertidos. La cartografía del desplazamiento en esta región es un continuo llegar y huir; un incesante y agotador vaciado de las cuencas donde las comunidades afro e indígenas, muy mermadas, siguen defendiendo el territorio. Según el Registro Único de Víctimas del Gobierno, los primeros desplazados, los de 1996, fueron 4.568. En 1997 la cifra fue brutal: 54.108 personas fueron expulsadas de sus territorios en oleadas sucesivas. A muchos les tocó desplazarse dos y tres veces entre ese diciembre de 1996 y diciembre de 2016. Cada año, una cifra terrible de desplazamiento que camina de forma paralela a la de asesinatos y desapariciones forzosas. Otros se resignaron a no volver.

El Bajo Atrato, al igual que después el Medio Atrato, se convirtió en un cementerio plagado de fosas comunes en los recodos de las veredas o en las islas que salpican el Atrato. La mayoría son de civiles, muchas -incalculables-, de combatientes de la guerrilla y de los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas. El comandante máximo de este temible bloque, Fredy Rendón, El Alemán, identificó 180 de esas fosas, aunque se calculan que son unas 450. La Fiscalía apenas roza la epidermis de este cementerio sin lápidas y en febrero de 2016 informaba que había exhumado seis cuerpos de la conocida como “masacre de Pavarandó”, una matanza graneada realizada por el Bloque Élmer Cárdenas entre diciembre de 1997 y enero de 1998.

Fuera de las comunidades

Unos volvieron. Otros siguen retornando. El proceso ha sido complejo porque la guerra ha seguido. “La región sigue en conflicto. Han cambiado las dinámicas. Antes eran asesinatos colectivos, hoy lo hacen selectivo... son masacres de dos, tres personas, están asesinando verdaderamente a los líderes por defender el territorio ancestral y por defender a las víctimas”. Esaud Lemos Maturana preside desde hace 13 años Adacho (Asociación de Desplazados Afrodescendientes del Chocó), una de las primeras organizaciones de desplazados fundada en Quidbó por la diáspora de Riosucio. Poco antes de la firma del acuerdo de paz, recordaba que las dinámicas en el territorio son otras pero siguen cruzadas por la violencia.

Solo hay que revisar la historia reciente para ratificar sus palabras. Si en Pavarandó estuvo el mayor campo de refugiados, allí operó uno de los frentes del Bloque Élmer Cárdenas, hoy, en 2016, sigue siendo un bastión de las reconvertidas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A principio de este año la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaba el asesinato por parte de paramilitares de tres campesinos en ese corregimiento de Mutatá. En Riosucio han sido asesinados otros tres civiles en los últimos meses. La propia Defensoría del Pueblo denuncia que “el grupo armado ilegal post-desmovilización de las AUC, que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Urabeños, hace presencia principalmente en las zonas de la carretera entre Chigorodó y Mutatá en las veredas Juradó, Guapá carretera, La

Fortuna, Chadó carretera, Bejuquillo, Pavarandocito, Pavarandó y en algunos sectores que de Mutatá conducen a Belén de Bajará y de allí hacia el puerto de Brisas en el Bajo Atrato”.

Los que nunca volvieron se enfrentan al desarraigo, al olvido y a las violencias urbanas. “Ahora [los que se desplazaron a Quibdó] estamos fuera de las comunidades, pasando muchas dificultades en los cascos urbanos. Las personas que están en Adacho [1396 familias, 8536 personas] son los primeros desplazados de Riosucio, que llevan 18 años aquí, y me atrevo a decir que no hay ni una familia realmente restablecida plenamente de sus derechos. Aquí es con pañitos de agua tibia es que se trata a la población”, explica Esaud.

En Adacho andan preocupados con el papel ‘marginal’ que los desplazados (7 millones según el RUV) en los acuerdos entre Gobierno y FARC. “Dentro del proceso de paz no se ha mirado con seriedad y compromiso la palabra retorno. No entiendo cómo hoy nadie nos habla de retorno. Las entidades se han quedado dormidas, quietas... es como que hay una orden desde arriba porque se preparó el territorio para destruirlo, así que cuando la gente retorne solo se va a encontrar agua, piedras.... Más nada”. Y Esaud recuerda que la mayoría de desplazados atrapados en Quibdó viven en los barrios del norte de la ciudad, azotados por el crimen organizado y la disputa territorial entre paramilitares y milicianos de las FARC y del ELN.

La realidad es que hay miles de personas de las que salieron del Bajo Atrato y del Urabá chochoano diluidas en barrios de acumulación en las grandes ciudades del país y muchos ya no pueden plantearse el retorno: perdieron tierras, lazos y esperanza y sus hijos, crecidos en la periferia de la Colombia visible, ya no saben adónde pertenecen, adónde podrían regresar.

Ana Luisa sigue luchando, articulada en la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba). “Retornamos de Pavarandó en el 98. En el 2001 hubo otro desplazamiento grande a otras comunidades más cercanas. Ese desplazamiento fue por la persecución de los paramilitares. Eso ha seguido pasando... pero la gente viene resistiendo”. Para Colombia, Pavarandó es un nombre tan exótico como podría serlo Maputo. En la memoria del Bajo Atrato y de Urabá este corregimiento podría ser el epicentro de una historia que aún está por contar.





Ana Luisa Ramírez Flórez

**“Llorar para
tener resistencia,
comer cuando
había pasado el
hambre, perder
vidas y amores”**

Fotografía: Paul Smith

Ana Luisa Ramírez Flórez fue una de las desplazadas del Río Salaquí en 1997, tenía 13 años. Ahora relata en primera persona un camino que la llevo a crecer y a convertirse en una lideresa para su comunidad y para otras mujeres.

Soy chocoana. Nací en la comunidad de Arenal Medio, en el río Salaquí, en el municipio de Riosucio. Tenía cinco meses cuando mis padres se trasladaron vivir a la comunidad de Chicao, junto río Domingodó. Allí viví mi infancia, feliz, alegre, juiciosa en mis estudios; cuando salía de la escuela me iba a pajarrear el arroz y el maíz para que no se lo comieran los pájaros. A veces íbamos todos los amigos y mis hermanos a pescar río arriba. Los fines de semana hacíamos café de maíz para mi abuela para que nos contara historias de nuestros ancestros. Todos los pelaos nos sentábamos en la casa comunitaria para escucharla. Nunca supe qué era aguantar hambre y dejar todo tirado hasta el momento en que cumplí 13 años.

A esa edad era solo una niña. A esa edad fui desplaza. Atrás quedaron los paseos al río, los relatos en la casa comunitaria, los ratos pajareando arroz. Atrás quedó la niña. Era el año 1997. Tenía 13 años y fui desplazada de mi comunidad.

Anita, como todo el mundo me conoce, no sabía qué era un rostro con hambre, ni había visto tanta gente con tanta tristeza. Salí acompañada de mis familiares y amigos desde la comunidad de Chicao y recorrimos un largo camino hasta llegar a Pavarando. Fue una odisea ver cómo la gente corría sin esperanza, sin saber dónde se dirigía. Solo seguían a unas voces que decían: “¡vienen los mocha cabezas, nos tenemos que ir o nos acabarán a todos!”.

Por el aire se veían unos pájaros grandes que hacían un ruido espantoso, unos pájaros grandes que cuando tiraban las bombas ponían a la tierra a estremecerse.

Primero, salimos de Chicao hasta Chintadó. Tres días de camino parando en las orillas. Pasamos por varias comunidades hasta salir al Atrato y llegar a un punto que se llama La Grande. Allí entramos en el río Jiguamiandó para llegar a Pavarandó.

Fueron 7 días andando por agua y trocha. Todos estaban atemorizados al ver tanta gente huyendo. Tanta gente sin nada, solo pudimos sacar lo que se

podía cargar y que no pesara. Las mujeres embarazada parieron en el camino, recuerdo que a una niña que nació allí la llamaron María Paz, pero otras mamás no contaron con la suerte de que sus hijos vivieran.

Mis pies se cansaron de las botas que llevaba y se las entregué a una amiga; seguí caminando con chanclas, pero se las comieron las piedras y la arena; seguí caminando descalza y mis pies se ‘allagaron’, al igual que le pasó a muchos de los que allí iban. Sentí mucho dolor, pero no hubo tiempo de decirle a mi mamá... mi medicina fue flotar mis pies con barro y seguir caminando. Nos cogió la noche llegando a un yucal que estaba prendido en candelas, allí había mucha más gente desplazada de otras comunidades. Éramos unas 1.700 personas con sus pocas cosas y el miedo. Había muchos niños, ancianos y mujeres. Pero no había comida ni agua y, aunque cavamos un pozo, era insuficiente.

Al saber que de momento no continuábamos, algunos decidimos cobar [cosechar] yucas para comer. Afortunadamente, estaban cocinadas por el calor y así pudimos minimizar el hambre.

Al día siguiente, algunos nos adelantamos, pero nos tocó regresar para ayudar a las mamás que llevaban 6 o 7 niños. Caminamos por horas y al llegar por fin a Pavarandó fuimos recibidos a plomo por la Fuerza Pública. Amanció Rodríguez y una niña de la cual no recuerdo su nombre fueron heridos, y a la señora Rosmira la golpearon. Todos tienen, aún hoy 20 años después, secuelas físicas de esas agresiones.

El primer día en Pavarandó fue muy difícil. Estaba tan cansada que me tocó acostarme sobre de una piedra; no había espacio para dormir, era un potrero. La gente estaba muy junta, pero es que nadie quería separarse; era como una forma de darnos fortaleza en aquellos momentos. La Cruz Roja fue la primera en llegar para llevarnos comida.

Después de unos días nos organizamos por comunidades, cada quien localizó a su familia y algunos líderes empezaron a impulsar la recuperación del proceso organizativo.

En una reunión con la comunidad de Chicao me eligieron para que participara en las cosas de la comunidad. Acepté con miedo porque las mujeres en mi comunidad se dedicaban al oficio de la casa, a cuidar a sus hijos, a atender a sus maridos, a sembrar arroz y maíz y a pescar, pero no se las veía metidas en reuniones; el proceso organizativo era más cosa de hombres. Pese a eso, dije: “Aquí estoy”, y desde ese momento empecé a ver la vida diferente, mi objetivo era trabajar por la comunidad.

Llegaron los talleres, las reuniones, fui a representar el éxodo en Bogotá en diferentes embajadas o donde me tocara. Veía a la gente a mi alrededor tan estresada que empecé a componer canciones sobre el desplazamiento para que pudieramos divertirnos en medio de la tristeza y sobrellevar el tiempo. Con un grupo de personas que compartía esta idea, comenzamos a hacer conciertos en los que los instrumentos eran galones, tapas de ollas, ralladores, tenedor y una violina. Esto sacaba a la gente, al menos por momentos, de su rutina de tristeza.

En esos días de Pavarandó, se conformaron la Organización Interétnica del Bajo Atrato (OIBA) y la Organización de Mujeres Campesinas del Bajo Atrato (OMCABA) y las mujeres empezamos a organizarnos y capacitarnos para reclamar nuestros derechos.

Un tiempo después llegó el retorno, era el año 1998 y ya estábamos organizados por asentamientos. Ya no era la niña de 13 años, tenía mucha más madurez y quería estudiar, pero en Riosucio solo existía el colegio rural Claret para adultos, y yo era menor de edad. Fue una lucha conmigo misma. Durante la semana de clase me acercaba al colegio, entraba y me sacaban. Me puse insoportable, saboteaba las clases, no dejaba concentrar a nadie, tiraba palos y tierra. Y así seguía un día y otro hasta que una de las profesoras me dejó entrar en su clase. Fui superactiva, hice mis tareas y trabajaba como si ya me hubieran aceptado; eso hizo que otros profesores me aceptaran, así que dejé de tirar palos. El coordinador, Giovanni Toros, el profesor Pedro José Palomeque y algunos estudiantes se reunieron y acordaron aceptarme en el centro. Para mí fue un logro muy importante.

Yo continuaba por entonces con el proceso organizativo en el comité de jóvenes. Hacíamos actividades para mantener a los jóvenes integrados y sensibilizaciones para decirle “No” a la guerra. Entonces quienes integrábamos el comité y los líderes de la mesa negociadora de paz empezamos a ser señalados por la guerrilla y por los paramilitares. Esto se convirtió en una *zambumbia* (una revoltura pero nada buena). Seis de los jóvenes fueron asesinados. A mí me sacaron para Bogotá y eso fue muy duro. Me sentía muy sola porque mi familia es muy numerosa y nunca había vivido sola en una casa. Entonces me trasladé a Medellín junto a otra compañera, Ana Rosa Díaz, que era líder de la mesa negociadora para la paz de Domingodó y también había tenido que salir de su asentamiento por amenazas.

Los días pasaban largos. Conseguí a mi marido y formé un hogar con él, un joven al que también habían sacado por amenazas. Me quedé embarazada. Tras unos meses me hablaron de la formación de ASCOBA (Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato). Los líderes me dijeron que las condiciones en Riosucio estaban más calmadas y que me podía quedar allí. No lo dudé y me fui. Desde el año 2003 empecé nuevamente con el proceso organizativo de ASCOBA poniendo en práctica mi liderazgo como mujer y como mamá.

Para mí, Pavarandó fue una escuela de aprendizaje. Nos tocó aprender a vivir sin nada, convivir con otras personas, a ser tolerantes, a divertirnos en la tristeza, a tener fuerza. Nos tocó llorar para tener resistencia, comer cuando había pasado el hambre, perder vidas y amores. Tuvimos que aprender a tener fe, amor y esperanza, y a darnos cuenta que la vida es una sola y que hay que valorar a las personas que están a nuestro alrededor y lo que poseemos porque no sabemos cuándo el destino nos lo va a quitar.



VEER

Woman in a striped dress

Woman in a light-colored uniform

Young boy in a t-shirt and jeans

Girl in a light t-shirt and dark pants

Paco Gómez Nadal

Las mentiras oficiales



Fotografía: Paul Smith

Ejército y Policía consiguieron convencer a algunos medios de comunicación de que en Riosucio estaba ocurriendo lo que no estaba pasando. Estas fueron las mentiras oficiales.

El relato oficial suele correr rápido por los medios masivos. La confusión entre fuentes oficiales, como fuentes con credibilidad, y fuentes de guerra provoca habitualmente que los comunicados y las declaraciones de los oficiales de las Fuerzas Militares sean consideradas como la verdad. Así ocurrió con Riosucio. Hasta que en marzo y abril de 1997 el diario El Colombiano de Medellín no publicó una serie de reportajes sobre lo que estaba aconteciendo en el municipio del Bajo Atrato, la “verdad” conocida por la opinión pública era realmente distante de la realidad.

La versión que dio el ahora detenido general (r) Rito Alejo del Río, entonces comandante de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa, era que se había producido una operación conjunta de las FARC y el ELN con cientos de guerrilleros que se habían tomado Riosucio. El diario El Tiempo publicaba la versión oficial el mismo 21 de diciembre de 1996, mientras unos 130 paramilitares hacían sitio en el casco urbano a los helicópteros de la Brigada XVII. “Según el comandante del batallón Voltígeros de la Brigada 17, coronel Alejandro Navas, los subversivos llegaron en chalupas y ocuparon durante varias horas la población. El coronel Navas informó que las autoridades locales denunciaron la desaparición de cinco personas y aseguró que cuando llegaron las tropas del Ejército, los guerrilleros habían huido por el río Atrato hacia Quibdó”, se podía leer.

En una demostración de cinismo, ese 21 de diciembre, El Tiempo¹ recogía las declaraciones del entonces gobernador del Chocó, Franklin Mosquera, quien aseguraba que “la policía está resistiendo, pero ya se pidieron refuerzos a Carepa”.

Un día después, el 22 de diciembre, El Tiempo² publicó unas declaraciones de Mosquera en la que asegura que no eran guerrilleros sino paramilitares

1 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-658109>

2 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-660143>

los que entraron a Riosucio el día 20 de diciembre, pero mantiene que se enfrentaron a tiros con los 23 agentes de policía que había en el pueblo. Es la “pantomima” que denunció en su momento el padre Emilio Gómez y que todas las fuentes confirman.

Unos días después, el 13 de enero³, el jefe de la Policía en el Chocó, Rigoberto Ojeda Prieto, señalado por los comandantes paramilitares como el contacto con las fuerza pública en la coordinación de la entrada en Riosucio, aseguraba que el municipio “estaba bajo el control militar y policial”. Sin embargo, se pronunciaba sobre “el bloqueo que la guerrilla ejerce desde hace más de una semana en varios puntos del medio y bajo Atrato (...) el coronel Ojeda informó que ya fueron levantados los retenes que la subversión tenía en Domingodó y Vigía de Curvaradó. Sin embargo, el oficial informó que entre Riosucio y Turbo, cerca de la desembocadura del Atrato, se han presentado nuevos retenes, pero que ayer mismo se enviaron lanchas pirañas para vigilar la zona”.

En el terreno la realidad era la contraria, y fue el padre Emilio Gómez, párroco de Riosucio, el que tuvo que viajar hasta Medellín y pedir ayuda a los periodistas de El Colombiano para que la verdad empezara a contarse. “Cuando vi publicado que Riosucio estaba tomado por paramilitares respiré de alivio”, recuerda Gómez.

El domingo 23 de marzo de 1997 El Colombiano publicaba un despliegue especial sobre El Chocó. La periodista Angélica María Lopera Isaza y el fotoreportero Manuel Saldarriaga, ambos de El Colombiano, publicaron el reportaje: “En Riosucio huyen del fuego cruzado”. En él ya se cuenta de la incursión paramilitar y de los bombardeos del Ejército que en aquella época todavía no tenían nombre (Operación Génesis). También se apuntan los excesos de soldados y paramilitares y el terror que ya en esos días, según los periodistas, había expulsado a 1.000 familias del casco urbano. El reportaje era encabezado por una escalofriante foto de Saldarriaga en la que se ve una pinta en una pared de madera en la que las Autodefensas de Córdoba y Urabá felicitan la navidad. En el mismo especial, Carlos Mario Gómez firma una página titulada: “En el Chocó, negros e indígenas temen etnocidio” y se apunta ya el avance

3 <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-535883>

de la guerra en todo el departamento y la relación de la acción armada con los intereses económicos. Una generación de periodistas de El Colombiano marcaron la diferencia en la cobertura del conflicto en Urabá y en el norte del Chocó: Javier Arboleda, Carlos Alberto Giraldo, Manuel Saldarriaga, Jesús Abad Colorado, Juan Carlos Pérez, Juan Gonzalo Betancur, Diana Lozada o los que firmaban las notas de marzo de 1997 hicieron un periodismo de terreno que ahora parece solo un vago recuerdo.

Las mentiras oficiales sobre lo ocurrido en Urabá y el Bajo Atrato se extendieron por años. Rito Alejo del Río defendió siempre la Operación Génesis y en abril de 1999, en pleno centro de Bogotá, en el Hotel Tequendama, su “trabajo” le valió un homenaje de 1.500 personas que, encabezadas por Álvaro Uribe y Fernando Londoño, ratificaban que el “Pacificador de Urabá” era un “ejemplo”, un “héroe” nacional. El acto buscaba compensar con elogios al general destituido por el entonces presidente Andrés Pastrana no por las denuncias de las organizaciones colombianas de derechos humanos y de las asociaciones campesinas, sino ante las denuncias del Gobierno de Estados Unidos que señalaba la relación entre el que fuera responsable de la Brigada XVII y la violación de derechos humanos. Al igual ha ocurrido con otros de los implicados en las operaciones Riosucio y Génesis, como se puede comprobar en este rastreo sobre la impunidad que persiste en estos casos. El olvido queda compensado en la hemeroteca.



A black and white photograph of a young man in a jungle setting. He is shirtless, muscular, and looking back over his right shoulder towards the camera. He is holding a long wooden plank horizontally across his waist with his right hand. The background is filled with dense tropical foliage, including palm leaves and other plants. The lighting is dramatic, highlighting the man's physique against the darker background.

Así nace una guerra

Fotografía: Paul Smith

El Atrato desemboca en un mar de olvido, pero sus gentes tienen la memoria viva y recuerdan con precisión los hechos de una guerra que para todos comenzó un 20 de diciembre de 1996 pasadas las 6 de la mañana.

Los hechos ocurridos en 1996 y 1997 confirmaron la estrategia conjunta entre paramilitares, Ejército y Policía para tomar el control del río Atrato. Esta es la cronología del primer año de esa incursión coordinada a partir de las sentencias de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Es mucho más lo acontecido, pero aquí se puede percibir la sistematicidad de unos operativos que pueden considerarse como el inicio de la guerra en el Chocó.

10 de febrero de 1996. Primera incursión paramilitar en Unguía

23 de febrero. Operativo Unguía 2 por el río Acandí

6 de octubre. Incursión paramilitar en el caserío La Madre. Dos campesinos son asesinados frente a la comunidad.

20 de diciembre. *Operación Riosucio.* Unos 130 paramilitares entran en la cabecera municipal y fingen un enfrentamiento con la Policía y se llevan y ejecutan a tres personas, entre ellas el alcalde encargado. Se retiran hacia Nueva Luz, a las afueras de Riosucio.

21 de diciembre. El general Rito Alejo del Río llega con tropas de la XVII Brigada e insiste en la “necesidad” de los paramilitares. Sus hombres están en el pueblo hasta el día 28, mientras los hombres de El Alemán comienzan la “limpieza” en las veredas cercanas.

En esos días huyen del casco urbano cientos de milicianos de las FARC y miles de ciudadanos comienzan un éxodo ante el temor de que el río Atrato, su vía de comunicación, quede bloqueada (como así ocurrió días después).

28 de diciembre. Vuelven los paramilitares al casco urbano y toman control.

9 de enero de 1997. Las FARC intentan retomar el casco urbano en un operativo fallido que deja varios heridos y muertos.

A lo largo del mes de Enero se producen bombardeos a supuestos campamentos de las FARC que ya habían sido abandonados por la guerrilla. La acción de la Fuerza Aérea afecta a varios caseríos.

Los paramilitares siguen con operativos en las veredas y siembran el pánico dejando un rastro de muerte que, según la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, dejó unas 800 víctimas. En recorrido con la Fiscalía, El Alemán ubicó hasta 180 fosas comunes.

Finales de enero de 1997. El Ejército y la Armada establecen férreos controles en el río Atrato, limitando la movilidad de los habitantes y, en la práctica, estableciendo un bloqueo económico que duró meses.

Del 23 de febrero al 5 de marzo. Se desarrolla la *Operación Génesis* en las cuencas del río Salaquí y Cararica con bombardeos aéreos y operaciones de tierra. En las operaciones participan de forma coordinada paramilitares (que bautizaron esta acción como Operación Cacarica). Se produce el desplazamiento masivo de las comunidades de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre otros.

Según testimonios de los pobladores, en la Operación Génesis fueron bombardeadas las comunidades de Caño Seco, Tamboral y Arenales, en la cuenca del río Salaquí, lo que causó el desplazamiento de aproximadamente 15 mil campesinos de las cuencas de los ríos Cacarica, Jiguamiandó, Curbaradó, Domingodó, Truandó y Salaquí, entre otros, hacia el corregimiento de Pavarandó en el municipio de Mutatá (Antioquia) y hacia las cabeceras municipales de Riosucio y Turbo. Algunas familias incluso llegaron hasta Cartagena.

Unas 4.200 personas se concentraron en Pavarandó y 2.300 se asentaron provisionalmente en Turbo y Bocas del Atrato (corregimiento de ese municipio). Alrededor de 200 cruzaron la frontera con Panamá y las demás se desplazaron a otras zonas del país, como la Costa Atlántica y el departamento del Valle.

La Defensoría del Pueblo aseguró: “El desplazamiento forzado de más de quince mil personas en 1997 no logró convocar la voluntad política del

gobierno para fortalecer su presencia y acción en la zona. A lo largo de estos años, el conflicto armado y las causas que generaron el desplazamiento masivo de las comunidades de la región se han intensificado. Las autodefensas y la guerrilla han tomado posesión de los cascos urbanos y de las zonas rurales, y sometido a amenazas, asesinatos y bloqueos a las comunidades, sin que las autoridades civiles y militares lo hayan impedido”.

27 de febrero. Es ejecutado en Bijao (Cacarica) el campesino Marino López por miembros del Bloque Chocó de los paramilitares. Por este caso fue condenado el general (r) Rito Alejo del Río.

18 de abril. El Gobierno de Panamá, en coordinación con el Ejército colombiano, deporta a unos 300 refugiados que habían cruzado la frontera desde noviembre de 1996. Entre ellos había 177 menores. Se utilizan helicópteros de la Fuerza Aérea y se les trasladó a la Hacienda “El Cacique” en Bahía Cupica, corregimiento de Bahía Solano. No se permite presencia ni acompañamiento de ACNUR ni de la Cruz Roja. Amnistía Internacional calculó en ese momento que unas 11.000 personas habían sido desplazadas.

Marzo. *Operación La Bonga Pueblo Nuevo.* Incursión de 100 paramilitares en el río Acandí y enfrentamientos con la guerrilla de las FARC. Se desplaza la comunidad de La Bonga Pueblo Nuevo. Son ejecutados tres civiles.

Abril. *Operación Tacarcuna.* Incursión paramilitar en la Bahía La Miel, en Panamá, para confrontar a guerrilleros del frente 57 de las FARC.

10 al 24 de mayo. *Operación Benkos Biohó.* Acción paramilitar contra el frente de las FARC que tenía ese nombre. Los paramilitares se desplazan en vuelos chárter a Condoto y, desde allí, incursionan por el río Beriguadó. No hay información sobre el número de muertos que dejaron los enfrentamientos.

22 de mayo. *Operación Vigía del Fuerte.* 90 paramilitares toman control de la cabecera de Vigía del Fuerte con la ayuda de dos pirañas y un barco de apoyo de la Armada. Esta operación les permitiría el control de este punto estratégico hasta marzo del año 2000.

2 de junio. *Operativo Juradó.* Se extendió durante todo el resto del año para controlar esa zona estratégica. Hay pruebas de coordinación con la fuerza pública de ese municipio y de la utilización de aviones y camiones de forma visible.

Entre el 10 y el 18 de diciembre de 1997. Operativo Remacho-Río Jiguamiandó. Además de asesinar a dos campesinos y provocar la salida de las comunidades, que se negaron a desplazarse y se declararon en resistencia internados en la selva, se calcula que los hombres de El Alemán mataron a 12 guerrilleros cuyos cuerpos tiraron al río.

31 de diciembre. Deja la Gobernación de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, después de dos años en los que fomentó las autodefensas Convivir y quien, según El Alemán, estuvo al tanto de muchas de estas operaciones y llegó a asegurar ante un juez de Justicia y Paz que: “El Bloque Élder Cárdenas apoyó las campañas de los de los representantes y equipos que llevaron a Uribe a la Presidencia de la República. Tengo pruebas documentales”.

Dos operaciones ocurridas hace 20 años marcaron para siempre al Chocó. Dos operaciones que no fueron aisladas y que explican con detalle las alianzas más perversas que han alimentado y degradado el conflicto armado en Colombia. La Operación Riosucio y la Operación Génesis están unidas por un reguero de sangre y de desplazamiento forzado masivo. La primera comenzó el 20 de diciembre de 1996 en la cabecera municipal de Riosucio (Chocó), aunque empezó a planificarse meses antes en cónclaves de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y en cuarteles de la Policía y del Ejército. La segunda desplegó, desde el 23 de febrero de 1997, la ira armada sobre las cuencas de los ríos Cacarica, Salaquí o Truandó y motivó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2013 en la que se demuestra la conexión orgánica entre los paramilitares y la XVII Brigada del Ejército Nacional, con sede en Carepa (Antioquia).

Este es un trabajo de memoria periodística realizado por un equipo de Colombia Plural con la colaboración de la Cátedra de Paz de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) de Cali y la corporación PACIPAZ del Chocó.



Visita nuestro sitio web escaneando este código con tu celular.



colombia plural
Otro país, otro periodismo

PACIPAZ
TERRITORIO, IDENTIDAD Y CULTURA PARA
LA PAZ EN EL PACÍFICO COLOMBIANO

 **Uniclaretiana**
Fundación Universitaria Claretiana

